

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 930

13 de enero de 2026

Presentado por la señora *Soto Aguilú*

Referido a la Comisión de Asuntos Municipales

LEY

Para enmendar el Artículo 2.035 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de prohibir que entidades sin licencia de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) participen en el Registro de Licitadores o en cualquier etapa de procesos de subasta para arrendamiento de bienes muebles en municipios o instrumentalidades gubernamentales; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Código Municipal de Puerto Rico establece el marco para la administración de procesos de contratación en los gobiernos municipales, incluyendo subastas públicas para la adquisición de bienes y servicios, con el objetivo de garantizar transparencia, competencia justa y cumplimiento de requisitos legales. Sin embargo, controversias recientes han revelado vulnerabilidades en estos procesos, particularmente cuando involucran arrendamiento de bienes muebles, donde licitadores sin la debida autorización de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) participan y resultan adjudicados, generando nulidades contractuales que desperdician recursos públicos y retrasan servicios esenciales.

Esta problemática se ilustra en casos como el resuelto recientemente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en *Sonnell Transit v. Junta de Subastas de Toa Baja*, 2025 TSPR 85. Allí, el Alto Foro determinó que la ausencia de licencia expedida por la OCIF para operar como arrendador de bienes muebles vicia insubsanablemente la adjudicación de una subasta municipal para el arrendamiento de vehículos, anulando el contrato por incumplimiento con las disposiciones de la Ley Núm. 20 de 8 de mayo de 1973, según enmendada, conocida como “Ley de Instituciones de Arrendamiento de Propiedad Mueble”.

En municipios como Toa Baja, Bayamón y otros con necesidades de transporte colectivo o equipo móvil para la prestación de servicios esenciales, estos vicios han causado demoras administrativas, costos adicionales por litigios e interrupciones en operaciones públicas, afectando directamente a las comunidades que dependen de servicios eficientes y continuos.

La Ley Núm. 20-1973 exige que toda entidad dedicada al arrendamiento de bienes muebles en Puerto Rico cuente con una licencia emitida por la OCIF, con el fin de proteger contra prácticas abusivas y garantizar el buen uso de los fondos públicos. Sin embargo, el Código Municipal no integra explícitamente este requisito en el Registro de Licitadores o etapas de subasta, permitiendo participaciones inválidas que comprometen la integridad del proceso. Precedentes en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, donde leyes de contratación gubernamental incorporan verificaciones previas de licencias especializadas, han minimizado nulidades y optimizado recursos.

Esta enmienda es crucial para alinear el Código Municipal con estándares de gobernanza responsable, previniendo el despilfarro fiscal en tiempos de restricciones presupuestarias y fomentando la competencia leal. Al prohibir la participación de entidades no licenciadas por la OCIF en subastas de arrendamiento de bienes muebles, se fortalece la rendición de cuentas, se reduce el riesgo de litigios y se asegura que los

contratos municipales cumplan con todas las normativas aplicables, redundando en servicios públicos más eficientes y transparentes para beneficio de la ciudadanía.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2.035 de la Ley 107-2020, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 2.035. — Subasta Pública, Solicitud de Propuestas y Solicitud de Cualificaciones — Norma General.

Excepto en los casos que expresamente se disponga otra cosa en este Código, el municipio cumplirá con el procedimiento de subasta pública, cuando se trate de:

(a) ...

(b) ...

(c) ...

(d) ...

(e) ...

...

El municipio establecerá un reglamento que incluirá, entre otros asuntos, las condiciones y requisitos que solicite el municipio para la adquisición de los servicios, equipos, y/o suministros necesarios. Aquel licitador que posea el certificado de elegibilidad vigente emitido por la Administración de Servicios Generales (ASG), solo tendrá que presentar dicho certificado a la unidad administrativa correspondiente, sin necesidad de presentar nuevamente los documentos o certificaciones que están cubiertos por el mismo. Establecerá, además, una cláusula donde haya una obligación por parte del

municipio de notificarles mediante correo certificado, con acuse de recibo, a las personas que no resulten favorecidas en la adjudicación de la subasta. La Legislatura Municipal autorizará la aprobación de un reglamento a estos fines. En aquellos casos en los cuales el municipio se disponga a adquirir servicios, materiales, equipo, comestibles, medicinas y otros suministros de igual o similar naturaleza u obra de construcción o mejora pública cuyas fuentes de fondos provengan de programas federales, el municipio llevará a cabo el proceso de adquisición en cumplimiento con los parámetros establecidos en el 2 CFR 200 y la reglamentación vigente. Disponiéndose, que el municipio queda facultado a adoptar, mediante ordenanza o resolución al efecto, aquellas políticas, métodos de licitación y umbrales de adquisición bajo la regulación federal aplicable.

En las subastas para el arrendamiento de bienes muebles, no podrán inscribirse en el Registro de Licitadores ni participar en ninguna etapa del proceso aquellas entidades que carezcan de una licencia vigente emitida por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 20-1973, según enmendada, conocida como “Ley de Instituciones de Arrendamiento de Propiedad Mueble”. La Junta de Subastas verificará el cumplimiento de este requisito previo a la admisión de ofertas. Cualquier adjudicación en violación a lo aquí dispuesto será nula de pleno derecho, sin perjuicio de sanciones administrativas o penales aplicables.

No obstante lo anterior, la falta de inclusión en el Registro de Licitadores por motivo de no contar con la licencia vigente expedida por la OCIF en un momento determinado no constituirá una inhabilitación permanente. Consecuentemente, una vez la entidad o persona obtenga la referida licencia conforme a las disposiciones de la Ley

1 Núm. 20-1973, según enmendada, podrá solicitar su inscripción en el referido Registro y
2 participar en futuros procesos de subasta, sujeto al cumplimiento de los demás requisitos
3 aplicables.”

4 Sección 2.- Cumplimiento

5 Se faculta al Departamento de Estado y a la Administración de Servicios Generales
6 (ASG) a adoptar regulaciones complementarias para implementar esta disposición en
7 coordinación con la OCIF, incluyendo mecanismos de verificación digital integrada al
8 Registro de Licitadores.

9 Sección 3.- Vigencia.

10 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.